

**CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD**  
**ACTOR: ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO**  
**SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS**  
**SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD**

En la Ciudad de México, a dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta a la **Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, instructora en el presente asunto**, con lo siguiente:

Constancia	Número de registro
Copia certificada de la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación <b>en el recurso de reclamación 149/2022-CA.</b>	---

Conste.

Ciudad de México, a dieciocho de enero de dos mil veintitrés.

Agréguese al expediente, para que surta efectos legales, la copia certificada de la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de reclamación **149/2022-CA**, derivado de la presente controversia constitucional.

Ahora bien, vista la resolución del recurso de reclamación referido, se advierte de las consideraciones, fundamentos y efectos que la Segunda Sala de este alto tribunal determinó, por mayoría de tres votos, declarar fundando el recurso de reclamación y revocar el acuerdo por el que se admitió la demanda de la presente controversia constitucional:

27. "(...) Es esencialmente **fundado** el argumento, pues esta Segunda Sala advierte la actualización de una causal de improcedencia que da lugar al sobreseimiento de la controversia principal, atento a lo previsto en el artículo 19, fracciones VIII y IX, en relación con el diverso 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, de la lectura integral de la demanda principal, se desprende que, efectivamente, **la Alcaldía actora carece de interés legítimo, pues no hace valer violaciones a una competencia que tenga directamente reconocida por la Constitución Federal, sino, en todo caso, violaciones indirectas relacionadas a la Constitución de la Ciudad de México y a disposiciones secundarias.**

28. Para explicar lo anterior, debe señalarse que el último párrafo de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, adicionado con motivo del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, establece que: **'En las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte'**.

29. Asimismo, debe destacarse que el Tribunal Pleno al resolver los **recursos de reclamación 150/2019-CA y 158/2019-CA**, en sesiones de tres y cinco de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente –antes de la reforma constitucional en cita– sostuvo que **no toda violación constitucional puede analizarse en vía de la controversia constitucional, sino sólo las relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a los que versen sobre la invasión, vulneración o simplemente afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional.**

30. Se dijo que, **si bien el criterio o principio de afectación se ha interpretado en sentido amplio** (esto es, que debe existir un principio de agravio, el cual

puede derivar no sólo de una invasión competencial, sino, además, de la afectación a cualquier ámbito que incida en esa esfera regulada directamente desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son las garantías institucionales previstas en su favor o, incluso, prerrogativas relativas a cuestiones presupuestales), **lo cierto es que tal amplitud siempre debe entenderse en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales.**

31. De esta manera, la precisión de mérito dio lugar a que el Tribunal Pleno identificara como **hipótesis de improcedencia de la controversia constitucional**, las relativas a cuando el actor alegue exclusivamente violaciones relacionadas con: **a) Cláusulas sustantivas, diversas a las competenciales; y b) Cuestiones de estricta legalidad.**
32. Lo anterior se corrobora con la **jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.)**, de rubro: **‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO’.**
33. Cabe destacar que, de manera particular, el Tribunal Pleno al resolver el **recurso de reclamación 150/2019-CA**, en sesión de tres de diciembre de dos mil diecinueve, precisó que **la materia de estudio en controversias es puramente constitucional**, lo que se traduce en que **es necesario que el actor aduzca una violación directa a una atribución o derecho que le reconozca la Constitución Federal, dejando a un lado todas aquellas violaciones de carácter indirecto**, es decir, en las que se planteen infracciones a disposiciones secundarias, que se traducirían en transgresiones al principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, siendo la demanda, en estos últimos casos, notoriamente improcedente.
34. Atento a ello, en la demanda de la controversia principal, la Alcaldía actora impugna el **“Decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México”**, publicado en la Gaceta Oficial local el seis de junio de dos mil veintidós y, en la parte conducente para acreditar su interés legítimo, manifiesta lo siguiente: (...).
35. Por su parte, en los conceptos de invalidez que formula en su demanda, la actora principal hace valer, en esencia: (...).
36. De lo anterior, se advierte que la Alcaldía actora insiste en que el acto que impugna en lo principal invade su competencia constitucional, en concreto una afectación a la atribución que, en materia de anuncios, le concede la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 53, numeral 3, inciso a), fracciones XXII y XXVIII, para, respectivamente, vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en esa materia, así como **‘otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y edificaciones, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables’.**
37. En específico, se observa que la actora principal se duele de que la Ley que impugna, distribuye competencias entre el Gobierno local y las Alcaldías, dejando a éstas últimas la facultad de verificar y otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios ubicados en vialidades secundarias, cuando, a su parecer, la Constitución de la Ciudad de México le otorga una competencia exclusiva.
38. Atento a ello, de la simple lectura de la demanda se desprende que **las violaciones alegadas por la actora se hacen depender de la transgresión directa a ordenamientos distintos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, y si bien en sus argumentos hace mención a lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, base VI, de la Carta Magna, en tanto que de dicho precepto declara que la administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes, lo cierto es que **de tal norma no se desprende una atribución expresamente reconocida a su favor que pueda ser tutelada en esta instancia constitucional.**

39. En efecto, el artículo 122, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica, en lo conducente: (...).
40. Del precepto constitucional que antecede, se desprende que el Gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías, **cuya integración, organización administrativa y facultades se establecerán en la Constitución Política y leyes locales**; asimismo, **reitera que la Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones**.
41. Atento a ello, como se adelantó, **el artículo 122, apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal no establece expresamente una atribución exclusiva en favor de las Alcaldías de la Ciudad de México**, que pueda ser tutelada en la vía de la controversia constitucional prevista en el artículo 105 de ese Magno Ordenamiento, sino que **reserva la distribución de competencias relativa a la Constitución y leyes locales**.
42. Lo anterior es notorio y manifiesto, pues, como se evidencia de la sola lectura de la demanda, **la Alcaldía actora no sustenta una violación directa a un precepto de la Constitución Federal, sino, en todo caso, indirectas a ese Magno Ordenamiento, sustentadas en la Constitución de la Ciudad de México (norma del orden local) y en disposiciones secundarias**, como lo es la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración de la propia entidad federativa.
43. **En todo caso, el planteamiento del actor debía evidenciar una relación entre el acto impugnado y una afectación al ejercicio directo e inmediato a una competencia que le reconozca expresamente la Norma Fundamental**, lo que en el caso no acontece, y aun cuando el actor hace referencia al artículo 122 de la Constitución Federal, ello es insuficiente para hacer procedente la controversia intentada, pues dicho precepto, como se evidenció, no otorga una competencia exclusiva en favor de las Alcaldías a que alude en la demanda, sino, en todo caso, **contiene cláusulas sustantivas (integración, elección, finalidades y principios) las cuales remiten a disposiciones de carácter secundario para la respectiva distribución de competencias, en concreto, la Constitución de la Ciudad de México y leyes locales**.
44. En consecuencia, acorde con lo establecido en el artículo 105 constitucional y los actuales criterios de este Alto Tribunal, **las violaciones indirectas a la Constitución Federal no son de la competencia que tiene esta Suprema Corte de Justicia de la Nación**, sino que, en todo caso, se requiere sustentar un principio de agravio derivado de la violación a una competencia que directamente se encuentre reconocida en esa Carta Magna.
45. Por tanto, en el caso, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 19, fracciones VIII y IX, de la Ley Reglamentaria que rige a la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, debido a **que la Alcaldía actora carece de interés legítimo, al no sustentar su demanda en una violación a una competencia directamente reconocida en ese texto fundamental, sino en todo caso, en violaciones indirectas del orden local**.
46. Atento a lo expuesto, esta Segunda Sala determina que, en el caso, fue incorrecto que se admitiera a trámite la demanda de la controversia de la cual deriva este recurso, puesto que su improcedencia resulta de la sola lectura de la demanda, atento a la actualización de las causales previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 19 de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales, en relación con el diverso 20, fracción II, de ese propio ordenamiento, de manera que, al resultar **fundado** el presente medio impugnativo, lo procedente es **revocar el auto recurrido y desechar la controversia constitucional**.
47. Refuerza a esta conclusión, el hecho de que, de manera reciente, **esta Segunda Sala ha matizado en diversos precedentes la legitimación de las Alcaldías de la Ciudad de México para efectuar impugnaciones contra actos emitidos por el Gobierno local**.

48. En efecto, al resolver los recursos de reclamación 121/2021-CA y 123/2021-CA, en sesión de veintiséis de enero de dos mil veintidós, derivados, respectivamente, de las controversias constitucionales 118/2021 y 119/2021, promovidas por la demarcación territorial Benito Juárez de la Ciudad de México, en contra, respectivamente, del “Acuerdo de facilidades administrativas para la realización de Proyectos de Construcción en Vías Primarias y de Acceso Controlado en la Ciudad de México” y del “Acuerdo de facilidades administrativas para la ejecución inmediata de Proyectos Inmobiliarios para la Construcción de Vivienda, Espacios para la Salud y Escuelas en todos sus niveles”, publicados en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, esta Sala observó que la Alcaldía actora carecía de interés legítimo por no sustentar sus demandas iniciales en la violación de una atribución expresamente reconocida por la Constitución Federal.
49. Criterio que fue reiterado al resolver los recursos de reclamación 83/2022-CA, 85/2022-CA, 87/2022-CA, 90/2022-CA y 91/2022-CA, derivados, respectivamente, de las controversias constitucionales 50/2022, 51/2022, 53/2022, 55/2022 y 54/2022, promovidas por las demarcaciones territoriales Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Benito Juárez, Azcapotzalco y Coyoacán, todas de la Ciudad de México, contra el ‘Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos Generales para la aplicación de la Evaluación Integral de las personas que ingresen o permanezcan en el Servicio Público de la Administración Pública de la Ciudad de México’, publicado en la Gaceta Oficial local el veinticuatro de enero de dos mil veintidós.
50. Asimismo, al resolver el recurso de reclamación 135/2022-CA, derivado de la controversia constitucional 125/2022, en sesión de cinco de octubre de dos mil veintidós, esta Segunda Sala determinó desechar la demanda promovida por la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, contra el ‘Decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México’, publicado en la Gaceta Oficial local el seis de junio de dos mil veintidós, al no alegar la violación directa de una competencia directamente trazada desde el texto de la Constitución Federal.
51. Finalmente, no pasa desapercibido para la conclusión alcanzada, que la Alcaldía promovente de la controversia principal, aduzca para la procedencia de su acción la invalidez decretada de diversos preceptos de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, conforme a lo resuelto por el Tribunal Pleno al fallar la controversia constitucional 282/2019, en sesión de seis de abril de dos mil veintiuno; sin embargo, al acreditarse en el caso la falta de interés legítimo de la Alcaldía actora, ello impide a este Alto Tribunal llevar a cabo el estudio de fondo del asunto, máxime que en el propio engrose del asunto en cita se señaló expresamente en el apartado de efectos que: ‘en términos del artículo 105, último párrafo, de la Constitución Federal, el alcance de los efectos se limita únicamente a las partes de esta controversia constitucional, sin que esta sentencia afecte la aplicación de la norma impugnada a los demás sujetos obligados a cumplirla.’
52. Consideración similar ha sido sustentada por esta Segunda Sala al resolver los recursos de reclamación 15/2022-CA y 16/2022-CA, en los cuales se concluyó el desechamiento de la demanda de controversia constitucional presentada por la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, por falta de oportunidad en su presentación, en la cual impugnó diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, solicitando la aplicación del precedente derivado de la referida controversia constitucional 282/2019.
53. Cabe precisar que en el citado precedente se analizó un tema distinto al que plantea la actora de la controversia principal, relacionado con el principio de titularidad del Alcalde sobre la administración pública que preside, a la luz del artículo 122, apartado A, inciso c), de la Constitución Federal y se observó, en concreto, que resulta inconstitucional la creación de un cuerpo profesional de

funcionarios verificadores ajenos a las Alcaldías, pues ello afecta su independencia para elegir a sus funcionarios y, en su caso, ejecutar actos administrativos concretos; en tanto que en la controversia de la cual deriva este recurso, la actora se duele de la distribución competencial hecha en un ordenamiento distinto a la Constitución Federal y no propiamente de la afectación a una atribución o principio expresamente reconocido en ese ordenamiento fundamental.

54. Estas consideraciones no son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa (ponente). Los Ministros Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek votaron en contra.

#### VI. DECISIÓN

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

**PRIMERO.** Es fundado el recurso de reclamación.

**SEGUNDO.** Se revoca el acuerdo recurrido.

**TERCERO.** Se desecha la controversia constitucional. (...)."

Por tanto, en cumplimiento a lo determinado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se

#### ACUERDA

**PRIMERO.** Se revoca el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en la presente controversia constitucional.

**SEGUNDO.** De conformidad con el resolutive **TERCERO** de la sentencia dictada en el recurso de reclamación 149/2022-CA, se desecha la presente controversia constitucional.

**TERCERO.** Archívese el expediente como asunto concluido.

Finalmente, con apoyo en el artículo noveno<sup>1</sup> del **Acuerdo General 8/2020**, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intégrese al expediente, para que surta efectos legales, la impresión de la evidencia criptográfica de este acuerdo.

**Notifíquese.** Por lista, por oficio a las partes y mediante MINTERSCJN regulado en el **Acuerdo General 12/2014**, a la Fiscalía General de la República.

Por lo que hace a la notificación a la Fiscalía General de la República, remítasele la versión digitalizada del presente acuerdo, por conducto del **MINTERSCJN**, regulado en el **Acuerdo General 12/2014**; en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II<sup>2</sup> del citado **Acuerdo**

<sup>1</sup> **Artículo 9.** Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán generar electrónicamente con FIREL del ministro presidente o del Ministro instructor, según corresponda, así como del secretario respectivo; sin menoscabo de que puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al expediente respectivo con el uso de la FIREL.

<sup>2</sup> **Artículo 16.** En los órganos jurisdiccionales del PJJ para la consulta y trámite de la documentación que les sea remitida por la SCJN a través del MINTERSCJN, se estará a lo siguiente: (...)

II. Para acceder a la información relativa a un requerimiento específico, se deberá ingresar al vínculo denominado "*Ver requerimiento o Ver desahogo*". En dicho vínculo será consultable una pantalla en la cual se indiquen los principales datos tanto del expediente de origen como del correspondiente al asunto radicado en el índice de ese órgano jurisdiccional del PJJ, así como copia digitalizada del proveído dictado en la

**General Plenario 12/2014**, el acuse de envío que se genere por el módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación número **123/2023**. Asimismo, de conformidad con el numeral 16, fracción I<sup>3</sup> del multicitado Acuerdo General Plenario, dicha notificación se tendrá por realizada al día siguiente a la fecha en la que se haya generado el acuse de envío en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, como lo refiere el citado numeral, el personal asignado, en este caso, de la referida Fiscalía, debe consultar diariamente el repositorio correspondiente, que da lugar a la generación de los respectivos acuses de envío y de recibo<sup>4</sup>.

Lo proveyó y firma la **Ministra instructora Ana Margarita Ríos Farjat**, quien actúa con el **Licenciado Eduardo Aranda Martínez**, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este alto tribunal, que da fe.

Esta hoja corresponde al acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictado por la **Ministra Ana Margarita Ríos Farjat** en la controversia constitucional **145/2022**, promovida por la **Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México**. Conste.

PPG/DVH

---

SCJN y, en su caso, de las constancias anexas a éste, documentos que tendrán visible en su parte inferior la evidencia criptográfica de la FIREL del servidor público de la SCJN responsable de su ingreso al MINTERSCJN. El acuse de envío que hará las veces del oficio de notificación, estará firmado electrónicamente por el servidor público de la Oficina de Actuaría de la SCJN responsable de la remisión electrónica; (...)

<sup>3</sup> **Artículo 16.** En los órganos jurisdiccionales del PJJ para la consulta y trámite de la documentación que les sea remitida por la SCJN a través del MINTERSCJN, se estará a lo siguiente:

I. Mediante el uso de la clave de acceso asignada y con su FIREL, el servidor público autorizado de un órgano jurisdiccional del PJJ deberá acceder diariamente a este submódulo del MINTERSCJ (SIC), específicamente a su sección denominada "Información y requerimientos recibidos de la SCJN", en la cual tendrá acceso a un listado de los requerimientos y/o desahogos remitidos desde la SCJN al órgano jurisdiccional del PJJ de su adscripción;

<sup>4</sup> Lo anterior, en términos de la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de apelación 4/2021 derivado del juicio ordinario civil federal 2/2020, resuelto por mayoría de cuatro votos de la Ministra Lucía Piña Hernández quien está con el sentido, pero se separa de los párrafos treinta y treinta y uno, los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente). Votó en contra el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien se reservó el derecho de formular voto particular.

